



LA IZQUIERDA Y LOS RETOS ACTUALES DE LA GESTION PUBLICA

Joan SUBIRATS

Introducción: los componentes tradicionales de la izquierda

Si quisiéramos hacer caso de Bobbio, diríamos que en el binomio igualdad-desigualdad encontramos aún el fundamento de la división entre derecha y izquierda. Esa distinción nos explica cosas, pero nos sumerge en nuevos interrogantes. ¿Qué quiere decir hoy luchar por la igualdad? Deberemos reconocer que la idea de igualdad no alcanza en la actualidad el consenso que había alcanzado hace apenas unos años. El concepto contemporáneo de igualdad se fundamenta en la creencia que las personas, como seres humanos, con independencia de su mérito, de su esfuerzo o de las condiciones naturales, tienen derecho a una satisfacción igual de sus necesidades esenciales. Eso no quiere decir eliminar las diferencias ni tampoco que se deba considerar que la idea de igualdad es de por sí «natural».

En la historia de la humanidad, más bien ha predominado la concepción de que la gente ocupa el lugar que tiene asignado en un orden o en una jerarquía que se conciben como naturales. La modernidad incorporó, en un binomio complicado (libertad-igualdad), la posibilidad de romper estos designios y trabajar por la igualdad desde la capacidad individual, desde la libertad. Libertad quería decir la posibilidad que se abría a cada individuo de trabajar a fin de reducir las desigualdades, para salir del rígido esquema de estructuración estamental característico de la premodernidad.

La izquierda fue surgiendo, precisamente, claramente vinculada a los movimientos antiabsolutistas y liberales, en los que fue desarrollando una cierta reacción ante un nuevo estado de cosas en el que si bien se proclamaban derechos y libertades, su realización práctica era mucho más dudosa. Los *diggers y levellers* de la revolución inglesa del XVII, o los «iguales» de Babeuf en la Francia revolucionaria del XVIII son un ejemplo de ello. No es pues extraño que las raíces históricas de los movimientos de izquierda más importantes a lo largo de los siglos XIX y XX fueran fuertemente influidas tanto por los principios de la Ilustración como por una tradicional desconfianza o recelo frente a las instituciones liberales.

La constatación del peso que ha tenido la tradición ilustrada en el pensamiento de izquierdas, es lo que nos permite entender las raíces de la creencia de que es posible cambiar la sociedad desde un diseño racional fuertemente estructurado, surgido de la mente privilegiada de los que saben lo que conviene al pueblo. De esta manera, el culto a la razón, el culto al progreso, lo justificaría todo. Así, se tiende a desconfiar de la libre interacción social, o de los mecanismos de intercambio mercantil, y se apuesta por estrategias más planificadas y dirigistas de organización social.

Desde el mencionado recelo ante la denominada democracia formal, surge un notable equívoco sobre los sacrificios de libertad que conviene aceptar o tolerar a fin de conseguir alcanzar la «verdadera» democracia. Los movimientos de izquierda lucharon por la democratización del Estado liberal. Lucharon por la extensión del sufragio. Lucharon por el aumento y la profundización de los derechos civiles. Y presionaron con éxito por la incorporación a las declaraciones de los derechos y libertades de un conjunto de derechos sociales y económicos que llenasen de contenido una libertad y una igualdad formalmente proclamadas pero realmente vulneradas. Pero, lo cierto es que a lo largo de decenios, con los matices que sea neces-

rio hacer en una explicación como esta forzosamente simplificada, la izquierda fue manteniendo fuertes equívocos sobre su grado real de adhesión estratégica a los principios liberal-democráticos.

A partir de consideraciones como las realizadas, será quizás más comprensible el tipo predominante de organización política que ha caracterizado la parte más significativa de la izquierda en estos últimos cien años. El partido se convertía en la encarnación de la racionalidad absoluta desde la que todo podía justificarse. El partido era el intelectual orgánico colectivo que sabía qué convenía hacer y cuándo y cómo convenía hacerlo. El partido era quién tenía la misión de «convencer» a la sociedad de lo que le convenía. Fuera a través del proselitismo y de la persuasión, fuera a través de la educación forzosa si así se consideraba necesario. El camino era la conquista del poder, para desde «arriba» conseguir transformar la sociedad. Las instituciones democráticas y la participación electoral eran sólo una de las alternativas de acceso al poder, pero no agotaban las posibilidades tácticas del movimiento. Ilustración, jacobinismo, blanquismo, hegelianismo, son componentes diferentes que van conformando el combinado ideológico que nutre a la izquierda más potente de primeros de siglo.

La revolución rusa, las dos grandes guerras, cambiaron muchas cosas en la configuración ideológica de las izquierdas europeas, pero, aun a riesgo de simplificar, diríamos que en el grueso del movimiento socialista y comunista se mantuvieron ciertos patrones mentales comunes a lo largo de gran parte de este siglo. Esta especie de despotismo ilustrado implícito, esta tendencia a confundir sociedad e individuos que la componen con movimientos sociales (o partidos), o esta tendencia a vincular el proceso de transformación social a aquello que se pueda hacer desde el poder, son algunos de los elementos que atraviesan el *continuum* de la izquierda organizada europea hasta finales de los ochenta.

La caída del Muro en 1989 es sólo el episodio final del derribo de la concepción más extrema y antiliberal de la tradición que describimos. Pero también la visión más incardinada en los principios demoliberales, y que en buena parte ha liderado el consenso socialdemócrata (y democristiano) que ha construido las estructuras de bienestar en la Europa de la posguerra, ha entrado en crisis. La construcción y desarrollo del Estado de bienestar ha tenido ventajas evidentes: cohesión social, reducción de las desigualdades, mejora general de la calidad de vida, etcétera. Probablemente hemos de atribuir a la iz-

quiera en su conjunto buena parte del protagonismo en la conquista de un *welfare* que puede ser considerado, junto con la consolidación de las libertades fundamentales, la característica más significativa del avance de la civilización en Occidente. Pero el *welfare* ha generado asimismo algunas consecuencias no tan positivas, o como mínimo no previstas, y que podemos atribuir tanto a los grandes cambios de todo tipo de este final de siglo, como a ciertas concepciones de la izquierda tradicional sobre las relaciones Estado-sociedad.

Esta visión de que la responsabilidad de todo lo que pasa es de los poderes públicos o debería serlo, ha provocado al mismo tiempo tanto un grado de intervencionismo probablemente injustificable en ciertos casos como una tendencia peligrosa al desarme civil, o por decirlo de otra manera, una creciente desresponsabilización social. Si «ellos» son los que saben lo que nos conviene, que lo hagan. No hemos de esperar entender lo que sucede «allá dentro», «nosotros» simplemente pedimos y se nos da. De esta forma, la política se ha ido aislando de la sociedad. Se ha profesionalizado y tecnificado, se ha ido haciendo extraña, y como corolario se ha ido «librando» de los ciudadanos. La potencia de los medios de comunicación ha acabado por llevar esta forma de hacer política, cada vez más próxima a un ritual representativo y una ficción ideológica, hacia algo de lo que dependemos pero que no comprendemos ni controlamos: un espectáculo más.

Por otro lado, la izquierda tradicional no se ha sentido nunca cómoda en la problemática nación-Estado-internacionalismo. El modelo liberal, que sirvió primero de elemento unificador contra el absolutismo, y que después sirvió de marco de refugio para el desarrollo del movimiento popular, incorporaba un modelo de nación jacobino, entendido como el único modelo capaz de asegurar un mercado y un Estado unificados ante la fragmentación clerical y ruralista del Antiguo Régimen. La izquierda llega pues a posiciones centralistas, tanto desde la perspectiva de alternativa liberal, como desde la posición racionalista e ilustrada antes mencionada. El problema es que este Estado es rápidamente hegemonizado por las fuerzas conservadoras, y la izquierda ha de refugiarse en el internacionalismo (que acaba demostrando sus debilidades en la votación de los créditos de guerra en los inicios de siglo) o en una alternativa centralista regeneracionista. La construcción del Estado de bienestar ha apuntalado las ideas del centralismo de izquierdas, al conectar las viejas tradiciones reformadoras de tipo jerárquico con la voluntad homogeneamente igualadora de las políticas sociales (de hecho hay quien considera que si bien las políticas de bienestar impulsadas después de la segunda gran

guerra resultaban coherentes con las necesidades objetivas de contar con un Estado homogéneo y con una capacidad mínima de compra, hoy, desde posiciones económicamente influyentes y dominantes, se podría perfectamente prescindir de estas políticas al disponer ya de un mercado global y homogéneamente accesible).

Problemas de adecuación

Este conjunto de concepciones que de forma harto simplificada hemos aquí resumido, ha ido conformando el pensamiento de izquierdas a lo largo de muchos decenios. Y sobre todo en los últimos cuarenta años se ha tendido a identificar izquierda con la defensa del intervencionismo creciente de los poderes públicos y de su capacidad de gasto, y, por tanto, también con una cierta desconfianza en relación a la iniciativa individual y colectiva. Sobre todo cuando esta iniciativa no estaba estrechamente ligada o subordinada a la intervención pública, la única que asegura la defensa de unos supuestos intereses generales que eran interpretados y protagonizados por el partido o los partidos correspondientes.

Los cambios tecnológicos y la mundialización económica, con lo que significan de superación de fronteras y de límites institucionales, y con lo que suponen de reforzamiento de las capacidades individuales y colectivas fuera del marco de las instituciones tradicionales, junto con la obsolescencia del modelo de planificación central, han comportado un fuerte impacto en las convicciones más tradicionales de la izquierda. La izquierda se ha ido identificando con el «problema social» generado por la revolución industrial y la economía de mercado. Los trabajadores eran los portadores de una modernidad superior, que sería capaz de gestionar tanto un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, como un nuevo gran desarrollo humano y social, mientras que sindicatos y partidos se constituían en los delegados sociales de estos trabajadores de fábrica. En esta nueva modernidad, se aboliría la división capitalista del trabajo tanto en sus aspectos sociales (propiedad privada, mercado, explotación) como en sus aspectos productivos, gestionando las fuerzas productivas colectivizadas mediante un plan explícito y formalizado. Es cierto que esta concepción maximalista de buena parte de la izquierda a lo largo de muchos decenios ha ido dejando ver sus debilidades y sus fracasos en los últimos tiempos, y se ha ido constatando que sin mercado y propiedad privada resulta difícil funcionar, y que la planificación centralizada no es superior a la economía de mercado ni desde el punto de vista económico, ni tan

sólo desde el punto de vista ético-político. A estos factores, que ponen en crisis las concepciones centrales de la izquierda y el protagonismo histórico de la clase obrera en su proceso de liberación, ya que las contradicciones se multiplican, como se multiplican los agentes de transformación posibles, deberemos añadir los fuertes impactos de los últimos y trascendentales cambios que hacen pensar en el final de un ciclo, el final del ciclo socialdemócrata.

Las sociedades avanzadas de este final de siglo se caracterizan por la gran transformación productiva en un marco en el que las grandes plantas industriales desaparecen en medio de fenómenos de *out-sourcing* (deslocalización y diversificación territorial de partes del proceso productivo). Se puede ganar dinero sin necesidad de concentrar trabajadores. La aplicación de nuevas tecnologías permite incluso saltarse etapas enteras de un hipotético proceso de desarrollo consideradas como inevitables hace tan sólo unos años. Puede llegar a pasar, o ya está pasando, que en países en los que el desarrollo económico y productivo «salte» la etapa taylorista-fordista, el hasta ahora considerado natural surgimiento de la izquierda ligado a esta particular fase de evolución del sistema productivo no tenga por qué darse. En esta línea, pierde asimismo valor el territorio, y su característica vinculación al poder. Se puede producir en alta mar, en aguas internacionales, o si hablamos de control del Estado en un territorio, la difusión de los instrumentos de comunicación informática permite superar fácilmente las constricciones normativas de un país determinado. Por ejemplo, el libro del médico de Mitterrand vió prohibida su difusión por el juez, pero al día siguiente el libro se podía leer tranquilamente en una página *web* cualquiera de la red; o la reciente difusión vía Internet de las encuestas electorales en Francia en un periodo en el que la ley prohíbe su difusión por cualquier medio. Y pierde sentido, sobre todo, la vieja lógica representativa en la que decisiones y territorio parecían indisolublemente unidos. Así, desde un punto de vista más estrictamente político, se plantean problemas de gobernabilidad y de atribución de responsabilidades.

Crece los espacios de autonomía de los colectivos y de los individuos. Las decisiones se diversifican y se cruzan, creciendo la complejidad y la divergencia. Para «dirigir» el conjunto resultante, los mecanismos tradicionales de «decisión-mando-control» resultan del todo insuficientes. Decía hace poco el catedrático de Derecho constitucional, recientemente primer ministro en Italia, Giuliano Amato, que un gobierno por muy eficientemente que hiciera funcionar su aparato de gobierno, llegaría como máximo a «gobernar» un 20% de los asuntos del

país: se puede aspirar a dirigir más o menos efectivamente a treinta mil trabajadores encerrándolos en una fábrica, pero distribuidos de forma difusa, el sistema de gobierno ha de cambiar muy notablemente. Las interdependencias aumentan, y cada vez más se necesita más autogobierno, una mayor asunción compartida de responsabilidades para evitar que la fragmentación resulte excesiva.

Podríamos decir, por tanto, que las variables más significativas que fueron constituyendo año tras año los estilos de hacer política de las izquierdas, han ido cambiando. Y, sobre todo, en los últimos años lo han hecho de forma tan significativa, cuantitativamente como cualitativamente, que obligan a replantearse fuertemente las señas de identidad de eso que denominamos izquierda y que como concepto aún pervive en la batalla política diaria.

Recomposición de las izquierdas

El debate sobre la igualdad

El mensaje de Bobbio con el que abríamos estas reflexiones continúa siendo válido. Pero la lucha por la igualdad ha de cambiar hoy como ha ido cambiando a lo largo de los años. En los siglos XVII y XVIII la «izquierda» de entonces luchaba por conseguir la igualdad ante la ley. A mediados del XIX e inicios del XX, exigía participar como iguales en la formación de la voluntad estatal. A lo largo de este siglo se ha mantenido la idea de que no existía libertad real sin unos mínimos vitales garantizados.

Así, en los últimos años, se han utilizado tres instrumentos básicos para favorecer un nuevo equilibrio social. Por una parte, se han utilizado sistemas impositivos progresivos que extraen renta de los sectores económicamente más favorecidos. Por otra parte, se ha construido un sistema complejo de transferencias hacia los sectores de población de rentas más bajas. Y, finalmente, se ha creado una red de servicios públicos, también de carácter progresivo, que amplía el bienestar de esos mismos sectores de población. Este conjunto de medidas nos ha conducido a la situación actual. El problema es que, últimamente, han crecido las dudas sobre si los efectos redistributivos y equilibradores que se perseguían con todo ello se han producido realmente o no. ¿Se ha reducido realmente la desigualdad en la distribución de la renta? Y, por otro lado, ¿no está siendo un *handicap* para el desarrollo de un país el seguir o mantener estas políticas de igualdad?

En buena lógica, podríamos esperar que frente a estos interrogantes, las conocidas posiciones de derecha e izquierda se mantuvieran sin fisuras. Desde la derecha se objetaría que estas políticas no han alcanzado los objetivos perseguidos, ya que las bases de la desigualdad son más naturales que sociales. Y desde la derecha se añadiría también que este tipo de políticas son cada día más difíciles de defender en un entorno de economía global y muy competitiva. Desde la izquierda, en cambio, la respuesta debería ser la contraria. La distancia social se ha reducido y, por otro lado, no es posible establecer un *trade-off* negativo entre protección social y crecimiento económico.

La realidad nos dice que las políticas aplicadas en cada país explican muchas cosas. Así, en Estados Unidos o en Gran Bretaña las desigualdades han aumentado, y eso parece coherente con estrategias tendentes a frenar el intervencionismo estatal. Pero la cosa no acaba de cuadrar en Japón, un país con relativamente escasas desigualdades sociales, a pesar de tener porcentajes de gasto público similares a los de Estados Unidos o claramente más bajos que los de Gran Bretaña. En este caso parece que la explicación la tendríamos en las estructuras sociales y familiares de ese país, y en su capacidad de protección independiente de los fondos públicos, más que en el análisis de las políticas aplicadas desde el gobierno.

Por otra parte, cada sociedad ha ido consolidando una manera particular de entender las creencias, los ideales, las normas o las tradiciones de su vida política. Desde este punto de vista, es interesante constatar como en países como Estados Unidos la proposición que dice que es el gobierno quién, sobre todo, ha de pelear para reducir las desigualdades sociales, sólo recibe el apoyo de un 29% de la población, mientras que la misma proposición en Gran Bretaña o en Alemania obtiene el 60% o el 70% de adhesión, llegando en Italia o Austria a un 80% (*The Economist*, 5-XI-94). Aquí el binomio derecha-izquierda tampoco lo explica todo. Son más bien las tradiciones culturales de autorganización social, las tradiciones religiosas, etcétera, las que probablemente influyen más en el momento de valorar positiva o negativamente el papel del Estado.

Pero al margen del debate sobre el nivel de intervencionismo del Estado, se discute también si desde el punto de vista de favorecer la competitividad de un país conviene luchar por conseguir una mayor igualdad. Desde una visión estrictamente eficientista, puede considerarse un riesgo para la mejora del desarrollo el hecho de destinar recursos a paliar las diferencias,

pero cada vez hay más expertos que consideran que precisamente son las diferencias las que pueden poner en peligro el crecimiento sostenible.

Por otro lado, parece evidente que ciertas políticas, como las que propugnan mejorar el acceso a un buen sistema educativo para todos, consiguen al mismo tiempo hacer prosperar la igualdad e impulsar el crecimiento económico. Sobre todo en momentos en que los cambios tecnológicos y la competición incrementan la distancia entre los trabajadores mejor preparados y los que poseen unas habilidades obsoletas o muy poco adecuadas. Ciertamente, los profundos cambios que se han producido en las formas productivas, los cambios en la localización industrial, la obsolescencia de ciertos procesos y productos, han hecho crecer el número de «perdedores» o de «damnificados» en los países más desarrollados. La tensión social aumentará, y cada vez será más urgente encontrar mecanismos que consigan distribuir de manera más amplia los beneficios de una mejor eficiencia económica.

Si a este panorama que acabamos de describir añadimos la situación de los países menos desarrollados, con sus especiales condiciones de dependencia, entenderemos por qué se habla de que se está gestando una auténtica «bomba social», que cuestiona permanentemente la viabilidad del modelo de crecimiento económico que es hoy predominante. Por una parte, se constata una tendencia a la baja estructural de las materias primas, hasta el punto de que en uno de los últimos informes del Fondo Monetario Internacional se aconsejaba «resignación» a los países productores. En muchos de los países de América Latina se observa la ruptura de los vínculos de la estructura familiar, que durante muchos siglos se había conseguido mantener, estructurándose como una verdadera red de protección social. La polarización social aumenta, a pesar de que los planes de ajuste económico puedan considerarse satisfactorios en muchos países del área. Todo hace pensar a muchos de los observadores del momento social en América Latina que sin un concepto mundial de «crecimiento económico compartido» que tenga como objetivo evitar el peligroso binomio «más riqueza a cambio de más polarización», la situación desembocará, en relativamente poco tiempo, en tensiones insostenibles.

También en el ámbito mediambiental se plantean fuertes interrogantes sobre cómo establecer medidas de protección que aseguren el desarrollo sostenible, cuando las condiciones de desigualdad entre países son bien evidentes. Holanda o Singapur trasladan su producción de carne de cerdo fuera de sus

fronteras para evitar el fuerte componente tóxico de sus residuos. La igualdad de condiciones entre generaciones nos obligaría a mantener ciertas restricciones en nuestro desarrollo, pero las futuras generaciones no están hoy presentes en los mecanismos de decisión que utilizamos. ¿Podemos legítimamente obligar a países en vías de desarrollo a que ajusten su crecimiento a las restricciones ecológicas cuando nuestros países no lo han hecho en su momento? Quizás la complejidad de la situación exige encontrar mecanismos de compensación, como los iniciados por Noruega al «comprar» los derechos de uso de una parte de la selva tropical de Costa Rica, para evitar su explotación y contribuir así a políticas de equilibrio ecológico global.

El debate sobre la gestión

Encontramos pues, nuevas y más complejas exigencias de igualdad. Estos nuevos impulsos nos llevan a considerar que la tensión igualdad-desigualdad continuará formando parte de nuestro panorama ideológico y político. No obstante, no podemos seguir creyendo que ello ha de comportar una mera continuidad en las formas de intervención de los poderes públicos frente a los problemas sociales planteados. Las necesidades sociales se presentan hoy de manera mucho más heterodoxa que antes. Los poderes públicos, si bien han universalizado sus prestaciones, deberán ahora conseguir diferenciar y flexibilizar sus modalidades, si lo que quieren es no sólo ganar la batalla de la cantidad, sino también la batalla de la calidad de los servicios públicos.

La izquierda ha presentado siempre como una de sus señas de identidad la defensa a ultranza de lo público. Como ya hemos visto, detrás de esa bandera se pretendía recoger las mayores garantías posibles para las políticas y las iniciativas tendentes a evitar las desigualdades que el mercado genera, o atenuar sus efectos. En esa defensa no se hacían muchas distinciones entre ámbitos a regular, ámbitos a financiar y ámbitos en los que la gestión tenía que recaer en manos de empleados públicos. Después de años de confusión, de ofensiva neoliberal y privatizadora, pero también de creciente preocupación desde sectores de izquierda por los costes de esa defensa numantina de lo público, hoy empezamos a estar en condiciones de distinguir entre lo principal y lo accesorio en esa polémica. Y lo estamos, curiosamente, porque la sensación de que no es posible mantener simplemente el continuismo y la ampliación en las políticas sociales tradicionales, ha puesto de relieve lo relativamente accesorio de la polémica sobre las

nuevas formas de gestión pública, en momentos en que los interrogantes no se refieren ya al «cómo» se gestiona, sino que apuntan más arriba: «qué» debe regularse y financiarse desde el sector público, y «quién» ha de asumir esa obligación en caso de que exista.

Desde posiciones de defensa del patrimonio de las políticas sociales de estos años, hemos de aceptar que ha pasado la época del monopolio público en lo referente a la regulación, el financiamiento y la prestación de los servicios públicos. La defensa de la equidad en las prestaciones no puede implicar simplemente su pura y dura estandarización, ni que los servicios públicos se consoliden como rutinarios, despersonalizados e indiferentes. La única manera de evitar que los servicios públicos se acaben convirtiendo en periféricos, entendido aquí como sinónimo de beneficencia pública, es asegurar su diferenciación y flexibilización, sea en las formas de regulación y financiamiento, sea, sobre todo, en las formas de prestación.

La descentralización de las prestaciones, la capacidad de compartirlas con asociaciones y entidades privadas, de voluntariado o de base social, extender la participación de los usuarios-ciudadanos en los servicios o bien mercantilizar ciertas prestaciones, aun manteniéndolas bajo el control público, son diversas fórmulas y posibilidades que, con la experimentación que sea necesaria, deberíamos probar, si es que queremos mantener el máximo consenso posible en torno a lo esencial, es decir, el mantenimiento del núcleo esencial de las políticas de igualdad en este fin de siglo. Y para ello conviene asimismo ir difundiendo una filosofía de corresponsabilidad que margine situaciones de fraude o reduzca corporativismos sin sentido. Un fin de siglo que mantiene la tensión por evitar desigualdades extremas, pero que asimismo es un fin de siglo que, para los que defienden la plena singularidad de todos y cada uno de los individuos, de los ciudadanos, se presenta ple-tórico de fuerza.

El debate sobre la democracia representativa

¿Tiene sentido desde posiciones de izquierda seguir manteniendo las reticencias tradicionales sobre las promesas incumplidas de la democracia, criticando su visión estrictamente ritual-formalista? La izquierda no puede hoy expresar duda alguna sobre las reglas democráticas como los instrumentos fundamentales de autogobierno de una comunidad. Lo que sí conviene hacer es poner de relieve los peligros que

comporta la combinación de política-espectáculo y política profesionalizada. El espacio público se ha ido convirtiendo en un espacio monopolizado por los políticos. Un espacio donde reinan las reglas de los medios de comunicación de masas, que unidimensionalizan a los personajes, ya que la única cosa que acaba contando es la capacidad de cada quien de penetrar, de hacerse un sitio en la batalla mediática. Un espacio que ha sufrido y sufre un condicionamiento dramático por parte del poder económico, y de esa racionalidad (económica) que se nos presenta como omnicomprendiva. Poco a poco, la política ha ido convirtiéndose en un poder de alguna forma autoreferencial, blindado en relación al control de los ciudadanos. Como dice Flores D'Arcais, la privatización de la política (una política cada vez más sometida al doble mercado económico y televisivo) es la otra cara de la privación que ha hecho la política en relación a los ciudadanos (alejándolos del poder, y de un concepto completo de ciudadanía). Esta privación se hace cada vez más de forma «voluntaria». La manera de hacer política aleja a los ciudadanos, los hace más pasivos, y esto, en un círculo vicioso, hace más «libres» a los políticos, convirtiéndolos cada día en más arrogantes y más susceptibles de ser corrompidos. La democracia aumenta su carga de ficción, de espectáculo al que se invita a los ciudadanos de tarde en tarde (elecciones) vía campaña publicitaria, a fin de mantener las apariencias.

Se van perdiendo, pues, los nexos originales, las conexiones entre democracia representativa y representantes, sin que surjan alternativas creíbles. Pero, esta distancia comporta también una menor fiabilidad en la implementación real de las decisiones políticas de las instituciones. Las desautorizaciones populares ante decisiones tomadas sólo por «ellos» son cada vez más frecuentes. La gente tiende a desresponsabilizarse de los asuntos públicos, y esto crea numerosos problemas: la no asunción de la propiedad pública como propia, falta de sentido de culpabilidad o de autocontrol ante la defraudación fiscal o el fraude en las prestaciones sociales, falta de vergüenza al pedir soluciones públicas para problemas estrictamente privados, etcétera. ¿Cómo se puede pensar en reformar el sistema de *welfare* vía modificaciones o recortes técnicos sin rehacer el círculo derechos-deberes, poder-responsabilidad, que hoy esta visión cerrada y monopolística de la política ha ido despedazando?

La izquierda ha de buscar mecanismos para ampliar esta «democracia a tiempo parcial», contribuyendo a encontrar espacios de participación ciudadana en las decisiones colectivas que vayan más allá de la información sobre «lo que hemos pensado

hacer» («lo que hemos pensado que os conviene»), y sin confundir tampoco participación ciudadana con mecanismos de colaboración con los grupos de interés.

El debate sobre la forma partido

En relación a las estructuras organizativas, la recomposición de las izquierdas deberá, sin duda, comportar un replanteamiento de la forma partido tal como la hemos ido entendiendo. De hecho, estamos cada vez más en una época en la que los partidos se difuminan. En los medios de comunicación de masas no aparecen «partidos», aparecen «dirigentes de partidos» o conflictos congresuales de partidos. Se habla de la política sin partidos, pero no hemos encontrado aún mecanismos alternativos para mantener viva la expresión del pluralismo social sin los partidos. ¿Podemos continuar manteniendo la ficción de que a los partidos sólo les interesa lo que dicen sus afiliados y cargos públicos? ¿O deberíamos aceptar sin remedio que la única cosa que cuenta es lo que asegure la ampliación del impacto mediático y el hacer creer que el partido funciona sin fisuras? Si nos referimos a lo que caracterizaba tradicionalmente a los partidos de izquierda, deberíamos referirnos a un ámbito en el que se elaboran estrategias, se forman dirigentes, se articula la conexión partido-sociedad. ¿Continúa todo ello siendo verdad? La inmediatez de la acción política, la constante retransmisión en directo del debate entre partidos y del debate en el interior de los partidos no permite mantener figura alguna lejanamente parecida a la democracia interna ni tan siquiera al centralismo democrático. Los partidos se hablan y hablan con su militancia vía *media*.

Si combinamos lo que decíamos en relación a la democracia con lo que ahora manifestamos sobre la forma organizativa partido, deberíamos concluir que hemos de buscar formas como mínimo complementarias en la relación partido-sociedad. Deberíamos, para empezar, renunciar a los exclusivismos. No hay fuerza política alguna que pueda pretender ser o expresar al mismo tiempo a la izquierda socialdemócrata, a la izquierda comunista, a los nacionalistas de izquierda y a esa cuarta izquierda inquieta, transversal, difusa, y a veces refractaria (o incluso hostil) frente a las izquierdas organizadas, y sin duda muchas veces desilusionada. ¿Puede la izquierda organizada prescindir de esta especie de izquierda sumergida? Se trata, probablemente, del sector social que más decisivamente es preciso implicar en aventuras políticas que comporten una recuperación de la política, de una política «visionaria», ilusionadora.

¿Qué es lo que explica que esta gente se sienta de izquierdas y no se sienta hoy día atraída o ilusionada por ninguna formación política en particular? Si averiguamos algo más sobre sus características, podríamos quizás también avanzar en las dinámicas organizativas a impulsar.

En los últimos estudios de sociología electoral realizados en Italia o Suiza, se pone de relieve que la tradicional conexión trabajadores dependientes-izquierda tiene hoy día poco sentido. Si hasta hace unos años la izquierda era vista como un instrumento de mejora económica, como una garantía para alcanzar unos derechos sociales que asegurasen mínimos vitales, hoy parece que estas conexiones cambian. La mayoría de la gente ve a la izquierda más conectada a procesos de emancipación civil y cultural. Elementos como «seguridad», «trabajo», «ocupación», «coste de vida», forman parte cada vez más en el imaginario colectivo de elementos conectados con la derecha. Mientras que la izquierda se liga más estrechamente a «libertad», a «derechos civiles», a «participación», a «derecho de expresión», a «defensa del medio ambiente». Y, sobre todo entre los más jóvenes, «izquierda» es sinónimo de gente que valora la comunicación personal, las diferencias de género, las actividades culturales. Neomaterialismo de derechas, postmaterialismo de izquierdas, parecen iconos detectables en las percepciones hoy emergentes. La derecha parece garantizar más seguridad, y este es un valor nada despreciable en esta sociedad de incertidumbres en la que nos movemos: inestabilidad del mercado, difusión de fenómenos de criminalidad, crisis de los bloques y de las ideologías, flujos migratorios en ascenso. Los privilegiados tradicionales tienen miedo a perder aquello que siempre han tenido, y los que han llegado hace poco a una cierta, y quizás pasajera, seguridad, aún se muestran más intolerantes, ya que son también los más vulnerables. Ante este panorama, la derecha siempre tiene respuestas. Respuestas quizás moralmente inaceptables, por lo que suponen de cerrazón e intolerancia, pero respuestas (recordemos el «teníamos un problema, ya no lo tenemos» de Aznar en el incidente de los inmigrantes sedados, atados y repatriados).

La izquierda ha encontrado dificultades de adaptación a estos nuevos escenarios. Su fuerza igualitarista no encuentra fácil acomodo en sus estratos naturales, los trabajadores, que tienen ya algo de lo que precisaban, y que ahora, frente a las amenazas existentes, se giran hacia otros portadores de seguridad. La fuerza igualitaria de la izquierda se mueve mejor en temas como identidad, autorealización, lucha frente a las diferencias no estructurales. Se trata de una nueva izquierda surgida en plena edad de oro del *welfare*, que florece en me-

dio de grupos más secularizados e instruidos. No es pues extraño que la izquierda tenga hoy problemas de identidad, ya que sus bases naturales se alejan de esta tradición, buscando en la derecha orden, autoridad, intolerancia étnica, nacionalismo simple. Mientras, la izquierda mantiene un discurso que podríamos caracterizar como de más a la «contra»: desconfianza ante instituciones y fuerzas de orden, cosmopolitismo y defensa de los nacionalismos minoritarios, tolerancia étnica, en vivencias y sensibilidades que se definen, por tanto, más por estar planteadas en oposición que por estar expresadas en positivo.

De este conjunto de elementos podemos ir configurando una concepción de izquierdas que debe alejarse de los componentes más racional-integradores (clase-sindicato-partido), y más racional-planificadores (programa, conquista del poder, planificación jerárquica). Tiene que buscar su fuerza en la recuperación de los ideales comunitarios (¿parecidos quizás a aquellos calificados hace ya tiempo como utópicos?). Deberá partir de la hipótesis de que en la sociedad existen soluciones. Deberá evitar caer en los corporativismos que sin duda secularizan (fidelizan), pero que restringen la capacidad de adaptación y flexibilidad, encorsetando los márgenes de maniobra. Y tendrá que lograr recuperar para la política espacios propios, los espacios de una ciudadanía reconstruida.

Por otro lado, el conflicto parece hoy desplazarse hacia terrenos que eran considerados como prepolíticos, como el que podríamos denominar de ámbito de la legalidad, de la justicia. No es, pues, extraño que cada día oigamos hablar más de jueces enfrentados a políticos y grandes financieros. Reivindicar que se cumpla la legalidad es hoy curiosamente el arma de los que no tienen poder frente a aquellos que se saben lo suficientemente poderosos como para saltarse las reglas.

Reconstruir o reinventar la democracia representativa quiere decir trabajar para superar la distancia, las desconfianzas, los escepticismos y la «comodidad» de «dejarles hacer», pero con la condición de que tanto «ellos como nosotros haremos lo que queramos». Construir partido de izquierdas hoy seguramente quiere decir construir un partido en las fronteras de los sin partido, con los movimientos, con las asociaciones, con los grupos informales, con los individuos, en una visión de organización-red, de la que tanto se habla y que tan poco se practica. Hoy en día todo el mundo habla de la necesidad de caminar hacia organizaciones más horizontales, que permitan más contactos saltándose niveles, ya que se piensa que de esta forma se aminora el riesgo harto frecuente de que donde hay poder no hay infor-

mación, y donde hay información no hay poder. Pero, en política, los sistemas de organización y relación entre niveles continúan siendo sumamente arcaicos. Se envían cartas, se filtran llamadas telefónicas a emisoras de radio y televisión, etcétera. Si no rompemos estas distancias, los políticos continuarán pensando que controlan y la gente continuará sintiéndose desresponsabilizada.

La izquierda: nacionalismo e internacionalismo

Sin entrar a fondo en este tema, sí quisiera introducir algunos elementos al respecto de la relación izquierda-nacionalismo-internacionalismo. Uno de los aspectos más evidentes de la rápida evolución de los últimos años, y que ya hemos comentado aunque fuera de pasada, es la globalización económica, comunicativa y cultural que ha potenciado el gran cambio tecnológico. Por otra parte, la dimensión y la complejidad de los problemas, sus interconexiones, la dificultad en aislar unos temas de otros, unos factores de otros, está comportando una tendencia, parece que irrefrenable, a la globalización de problemas y de respuestas. Pero, a pesar de la simultaneidad de procesos económicos y sociales a escala mundial, y a pesar de muchos elementos que nos hablan de homogeneización política y cultural en el mundo, lo cierto es que aún pesan mucho las diferencias. En uno de los últimos films de Tarantino se caracteriza Europa como un espacio en el que lo que sorprende son las diferencias (aunque sólo sean las idiomáticas y de gastronomía). Lo que podría ser considerado como obsoleto o retardatario (ante la fuerza globalizadora, ante la fuerza y la dimensión de problemas que parece que sólo podrán ser abordados desde la globalidad) puede llegar a ser, de hecho, el gran valor de la construcción transestatal europea. Será en el respeto a estas diferencias desde donde se podrá construir, por mencionar temas de actualidad, con garantías de factibilidad, unas políticas de la Unión Europea que lleguen a ser sentidas y entendidas como propias por las diversas «partes» de este todo.

Las multinacionales hace tiempo que trabajan bajo el lema «pensar globalmente, actuar localmente». Desde nuestras dimensiones de análisis deberíamos invertir o completar esta idea con la frase «pensar localmente, actuar globalmente», ya que de esta forma se pone de relieve la necesidad de enraizar los discursos globalizadores en realidades locales o en realidades más revestidas de sentido, de comunidad percibida como propia. Sólo así la viabilidad de los proyectos quedará garantizada. Muchas veces desde una visión de izquierdas se nos ha-

bla de la obsolescencia de una excesiva atención a la realidad local o nacional frente a la dimensión de los problemas globales, y se hace asimismo referencia a la tradición del mensaje progresista, vinculada a la visión racional-vertical aquí ya comentada. Es desde arriba, dicen, desde donde será más fácil determinar problemas y proponer soluciones. Pero la desventaja es la posición de jerarquía con la que inevitablemente los sujetos de la decisión contemplan esta política. En política, como ya hemos dicho, la jerarquía cada vez servirá de menos. Sólo desde posiciones más simétricas entre los actores podremos garantizar procesos que ostenten legitimidad y que se asuman responsablemente. La recuperación de la comunidad, la recuperación de la idea de capital social o cívico, la construcción de un partido-red, pueden tener mucho más sentido y enraizarse mejor si lo hacen en una realidad en la que el binomio comunidad-organización política se presente como vínculo natural y no artificial. La solidaridad, la dimensión transnacional, encontrarán su fuerza propulsora en el enraizamiento comunitario y ciudadano en una pluralidad de realidades de articulación política que tiene hoy su gran oportunidad en el espacio europeo.

Más allá de la gestión: la política como visión

El marco de la política se ha ido estrechando. El gran conflicto ideológico de la primera mitad de este siglo o la tensión contenida de la guerra fría, han dejado paso a una omnipresente preocupación por las formas de gestión, por las alternativas de acción ante problemas que cada día parecen resistirse más a ser paliados o solventados. Pero, al mismo tiempo, ha ido desapareciendo la «visión» de la política. Parecemos más preocupados por cómo abrir la lata que por discutir si es esa la lata que hemos de abrir.

La teoría política se ha caracterizado siempre por pensar en cómo debería ser la sociedad. Precisamente porque describía a la sociedad de forma exagerada, «irreal», la visión política era un componente imprescindible de la acción diaria. Eso no quería decir desentenderse de lo que sucedía. Precisamente, su constante confrontación con la realidad, su constante acción política, requería perentoriamente una perspectiva de futuro. En estos últimos tiempos, la política ha ido disolviéndose, fragmentándose. La sociedad ha ido convirtiéndose en islas que tienden a autoexplicarse. Y entonces, ante la pérdida de sentido general, la gerencia y la responsabilidad gerencial aparecen casi como las únicas perspectivas posibles. La ciudadanía, el ciudadano, queda entonces disuelto en sus múltiples

identidades, perdiendo significación general. Pero cada vez más empezamos a echar en falta esta perspectiva integradora, en la que cada individuo reúna las múltiples funciones de la persona contemporánea, y pueda por tanto ser objeto y sujeto de un nivel mayor de responsabilización. La política volvería a tener entonces una capacidad integrativa (no controladora, no jerárquica) de dirección, de estrategia social. La política volvería entonces a ser el marco de participación comunitaria de los ciudadanos.

Es en este marco en el que las izquierdas han de reencontrar sus nuevos fundamentos. Reconstruyéndose desde la aceptación que la lucha por la igualdad, por un mundo mejor, más justo y solidario, continúa teniendo sentido, a pesar de todas las transformaciones producidas.
